

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 41**  
**O R D I N A R I A**  
**LUNES 18 DE ABRIL DE 2016**

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del lunes dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta ordinaria, celebrada el jueves catorce de abril del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes dieciocho de abril de dos mil dieciséis:

**I. 30/2015**

Acción de inconstitucionalidad 30/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 3, fracción III, 5, párrafo primero, y 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, reformados mediante Decreto 331, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de abril de dos mil quince. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2015. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción III; 5, párrafo primero y 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del estado de Zacatecas, en las porciones normativas que regulan secuestro y trata de personas, reformados mediante Decreto 331, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el once de abril de dos mil quince. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Zacatecas.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al artículo 5, párrafo quinto, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó que la propuesta del señor Ministro ponente Franco González Salas consistía en declarar la invalidez de dicho precepto, respecto de la cual consideró que no debe ser invalidado, ya que no existe

un parámetro material que permita el contraste propuesto, en razón de que, si esta Suprema Corte determinó que el legislador local es competente para regular la materia de extinción de dominio, entonces no puede utilizarse un parámetro material referido a la trata de personas para invalidar el ejercicio de esta competencia en la materia de extinción y, por ello, el concepto de invalidez debe ser calificado de infundado, pues a través de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos no puede el legislador federal determinar qué debe hacer el legislador local en materia de extinción o con el producto que resulte de sus procedimientos.

Recalcó que, si bien los delitos que pueden dar lugar al procedimiento de extinción se encuentran federalizados, como la trata de personas, esta competencia materialmente no restringe la libertad de configuración local en materia de extinción, aunado al hecho de que los procedimientos de extinción no se reducen sólo a dicho delito. Por tanto, la omisión del legislador local para establecer un fondo específico para las víctimas del delito de trata, o la dirección de los recursos de la extinción del dominio a través de la ley de víctimas local, no invalida la norma y, por tanto, anunció voto en contra de la propuesta modificada del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que los delitos respecto de los cuales procede la extinción de

dominio son el secuestro, la trata de personas, narcomenudeo y el robo de vehículos, siendo que el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no remite a un fondo en especial, sino que prevé la constitución de un fideicomiso, mientras que el artículo 44 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y 37 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén, respectivamente, un fondo especial para estos delitos, no así para el de narcomenudeo ni para el de robo de vehículos.

En ese contexto, manifestó duda si se debe declarar inconstitucional el precepto o no, tomando en cuenta que el artículo 53 de la Ley Federal de Extinción de Dominio prevé que “Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público”, y que el artículo 5, párrafo quinto, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas estipula que “Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Zacatecas, en

los términos de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados”, es decir, establecen lo mismo, por lo que propuso una interpretación sistémica en el sentido de que, cuando no se impliquen los fondos especificados por las leyes generales para los delitos de secuestro y trata de personas, los bienes se destinarán al fondo previsto en la ley estatal para los casos vinculados con los delitos de robo de vehículos y narcomenudeo.

El señor Ministro Laynez Potisek recordó que el artículo 81, fracción IV, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cita que “Los ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley. Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera: IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley”, con lo cual apuntó que hay un destino obligatorio para las entidades federativas para este delito; sin embargo, para los demás delitos —robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y narcomenudeo— había libre disposición de las entidades federativas.

Por lo anterior, adelantó que estaría de acuerdo con la interpretación sistemática, en la inteligencia de que, cuando haya una ley general que disponga fondos específicos, tendrán que respetarse y, para los demás delitos, el Estado puede destinar esos bienes a su patrimonio y crear incluso un fondo especial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó a favor de la constitucionalidad de la norma, pues de una interpretación sistemática de la legislación se puede concluir que la remisión a un ordenamiento, cuya materia son los bienes asegurados, no significa que los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio deban ser enviados a un fondo distinto y ajeno al previsto a la ley especial, sino únicamente que, para efectos operativos y de gestión administrativa de los recursos de ese fondo, debe atenderse a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas, lo cual se corrobora con el artículo 58 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, el cual prevé expresamente la existencia de dicho fondo.

Abundó que, si el artículo 44 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece el destino de los recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio tanto en el ámbito federal como en el local, en

cuanto a los procedimientos derivados de la comisión de ese delito, debe entenderse que los recursos obtenidos por esa vía en el Estado de Zacatecas necesariamente deberán integrarse al fondo estatal, independientemente de que éste tenga otras fuentes de ingresos, en el entendido de que el destino de los recursos de ese fondo se encuentra previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, de tal modo que es aplicable la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas, tal como dispone el artículo 73 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas.

Por tanto, se pronunció por reconocer la validez de la norma, en el entendido de que, de acuerdo con la legislación local, el fondo estatal de protección de víctimas del delito de trata no trastoca los derechos de las víctimas de ese delito ni altera el destino de los recursos obtenidos del procedimiento de extinción de dominio provenientes del delito de trata de personas, previsto en la ley general, sino que se trata de un sistema coherente con dicha disposición, como se prevé en los artículos 58 a 60 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

El señor Ministro ponente Franco González Salas estimó que la norma en cuestión genera inseguridad jurídica en su redacción porque ni siquiera remite a las leyes correspondientes; sin embargo, este Tribunal Pleno puede tomar las decisiones más sólidas.

Modificó el proyecto para proponer la interpretación conforme propuesta por la señora Ministra Luna Ramos, en el sentido de que la norma responde al mandato general de la Ley Federal de Extinción de Dominio, consistente en que los recursos deben ir a un fondo de los Estados, pero tomando también en cuenta que hay otras reglas en las leyes generales específicas de los delitos de trata de personas y secuestro respecto de cómo deben manejarse los recursos provenientes de estos delitos. Aclaró que, con esta modificación, se deja a salvo el tema de la libertad de configuración legislativa —como apuntó el señor Ministro Cossío Díaz— y se respeta el contenido de las leyes generales citadas.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que el artículo cuestionado es válido, dado que advirtió un choque determinante y frontal contra la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sobre la manera en que se debe destinar y conformar el fondo al cual se deberán agregar los recursos producto de la extinción de dominio.

Valoró que, aun cuando pudiera prevalecer una mayoría por la interpretación conforme, el proyecto original cumple con el objetivo de demostrar que el precepto combatido no debe ser declarado inválido, por las razones que en el mismo se expresan: que el artículo cuestionado cumple con la normatividad, estimando que las entidades



federativas tienen competencia para legislar en todo aquello que corresponda a sus propios ámbitos de competencia. Por ello, anunció voto en favor del proyecto original.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recalcó que la norma estatal adolece de un problema de competencia, por lo que no podría admitir un parámetro respecto de la ley general. Obligado por la mayoría, expresó que la interpretación conforme propuesta armoniza la discrepancia discutida en la sesión pasada, por lo que podría votar en favor de aquélla, siempre y cuando se explicitara lo relatado por el señor Ministro ponente Franco González Salas.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se reiteró por la invalidez de la norma, pues afecta la seguridad jurídica por dos razones: 1) porque establece, sin ninguna distinción por tipo de delito, que los bienes cuyo dominio se extinga se aplicarán en favor del Estado, en términos de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas, no que se destinen a ningún fondo ni que se atienda a ninguna de las leyes generales, máxime que la norma remite a la que no regula la extinción de dominio ni establece la existencia de fondo alguno; y 2) dado que las leyes generales de trata de personas y de secuestro establecen que la finalidad de los bienes, cuyo dominio se extinga, es formar los fondos que prevén, y no permite que el Estado los aplique a su favor.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se reiteró por la validez del precepto, y estimó que no es necesaria una

interpretación conforme, sino sistemática o sistémica del orden jurídico estatal, y recordó que esa fue la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos, no una interpretación conforme.

El señor Ministro Medina Mora I. coincidió con la exposición del señor Ministro Pardo Rebolledo, y en el sentido de declarar la invalidez del precepto impugnado.

La señora Ministra Piña Hernández anunció voto por la invalidez de la norma por una cuestión de competencia, además de concordar con lo explicado por el señor Ministro Pardo Rebolledo, pues la ley a la que se remite no refiere a la figura de extinción de dominio ni a ningún delito relativo.

El señor Ministro ponente Franco González Salas subrayó que busca la decisión más consensuada posible, y observó que la propuesta de interpretación conforme no tuvo mucho éxito.

Modificó el proyecto para proponer la declaración de invalidez de la norma en estudio.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra de la propuesta modificada, pues si se le ha reconocido competencia al legislador del Estado, con una interpretación sistemática basta para resolver el asunto.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, atendiendo a la modificación del proyecto, retomó su posición por la invalidez del artículo combatido.

El señor Ministro Laynez Potisek opinó que, el hecho de que la disposición impugnada señale que los recursos entran al patrimonio del gobierno, no contradice los fondos obligados de la ley general de secuestro ni de trata de personas, aunado a que éstas prevén la constitución de un fondo con los recursos que la entidad federativa haya obtenido por razón de esos delitos, siendo que el Estado de Zacatecas optó por crear un fondo de víctimas, para lo cual está en todo su derecho.

En ese tenor, mantuvo su posición en favor de una interpretación sistemática, la cual salvaría la constitucionalidad del precepto.

El señor Ministro ponente Franco González Salas aclaró que el fondo en cuestión no está previsto constitucionalmente, sino que es una solución del legislador ordinario para distribuir los recursos obtenidos por la extinción de dominio, y si bien hay una ley rectora de extinción de dominio, el legislador federal, en uso de sus facultades y en protección de las víctimas de los distintos delitos, estableció en las respectivas leyes generales cómo manejar los recursos obtenidos de la extinción de dominio relativos. En ese contexto, estimó que la norma combatida es indefinida y poco clara al no haber señalado, por lo menos, las previsiones atinentes a tomar en cuenta lo dispuesto por el legislador federal.

Por estas razones, resaltó que el artículo adolece de un problema de inseguridad jurídica, pues al referir a una ley

que no dispone absolutamente nada, eventualmente se permitiría la disposición de los recursos de extinción de dominio con absoluta libertad, sin atender a lo establecido para la protección de las víctimas de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su primera parte, consistente en declarar la invalidez del artículo 5, párrafo quinto, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, respecto de la cual se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, y en el sentido de reconocer la validez de esa norma. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Medina Mora I. votaron a favor.

El señor Ministro ponente Franco González Salas apuntó que este tema no estaba propuesto en el proyecto, sino que surgió con la discusión del asunto, por lo que agregaría la determinación de la mayoría al engrose respectivo. En este sentido, la votación deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su primera parte, consistente en reconocer la validez del

artículo 5, párrafo quinto, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Medina Mora I. votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su segunda parte, consistente en reconocer la validez de los artículos 3, fracción III, 5, párrafo primero, y 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena obligado por la mayoría en cuanto al tema de competencia, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría en cuanto al tema de competencia, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Piña Hernández y Medina Mora I. votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas y Pardo Rebolledo anunciaron sendos votos concurrentes.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

*“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2015.*

*SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del considerando cuarto de esta sentencia.*

*TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción III, 5, párrafos primero y quinto, y 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, en las porciones normativas que regulan secuestro y trata de personas, reformados mediante Decreto 331, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el once de abril de dos mil quince.*

*CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente de la lista:

## II. 4/2015

Acción de inconstitucionalidad 4/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del estado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del considerando cuarto de la sentencia. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 238 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se

aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea presentó el considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia. El proyecto propone sobreseer respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al resultar extemporánea su impugnación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció que reiteraría su voto en contra de este aspecto, como en el asunto inmediatamente anterior.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció de acuerdo con el tratamiento del proyecto en cuanto a esta causa de improcedencia, y adelantó que se apartaría del señalamiento atinente a que el promovente no manifestó una contradicción entre las normas impugnadas y los preceptos de la Constitución General o previstos en los tratados internacionales, sino únicamente respecto de las leyes generales en materia de secuestro, como se precisa en su página veintiocho; en razón de que no se trata de una causal de fondo, aunque se expresó de acuerdo con la desestimación propuesta.



El señor Ministro Medina Mora I. se reiteró en el sentido de su voto dado en la acción precedente, como lo hizo el señor Ministro Pardo Rebolledo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos con aclaraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de la desestimación de la causa de improcedencia atinente a que el promovente no manifestó una contradicción entre las normas impugnadas y los preceptos de la Constitución o de tratados internacionales, sino con las disposiciones de las leyes generales en materia de secuestro y de trata de personas, dado que involucra el fondo del asunto.

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto del sobreseimiento del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en contra.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, en tanto que se advierte que en ellos no se regulan propiamente los delitos de secuestro y trata de personas, sino que se incluyen estos ilícitos entre los que dan origen a la instauración del procedimiento de extinción de dominio de bienes.

Puntualizó que la cuestión a resolver consiste en determinar si las entidades federativas pueden legislar en materia de extinción de dominio con motivo de los delitos en materia de secuestro y trata de personas, lo que necesariamente se debe analizar a la luz de la regla competencial del artículo 124 constitucional, conforme al cual, las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a las entidades federativas. En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución, que prevé la figura de la extinción de dominio respecto de bienes relacionados con la comisión de ciertos delitos —entre ellos, secuestro y trata de personas—, no atribuye a la Federación la facultad exclusiva de legislar en la materia, lo que ha llevado a este Tribunal Pleno a sostener en distintos precedentes, tales como las acciones de inconstitucionalidad

18/2010, 33/2013, 20/2014 y su acumulada 21/2014, así como 3/2015, que las entidades federativas tienen competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio, siempre y cuando lo hagan respecto de delitos que son de competencia local o respecto de aquellos en los que cuenten con facultades de investigación, persecución y sanción.

Al respecto, relató que, tratándose de los delitos de secuestro y trata de personas, este Tribunal Pleno, en diversos precedentes —como las acciones de constitucionalidad 25/2011, 36/2012, 54/2012 y 56/2012—ha interpretado la manera en cómo opera la distribución de competencias a la luz del artículo 73, fracción XXI, constitucional, el cual prevé una competencia federal exclusiva en estos delitos únicamente en lo relativo al señalamiento de los tipos y sanciones, dejando al Congreso de la Unión la facultad de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en todos los demás aspectos relacionados con ellos. Asimismo, dichos precedentes señalan que, en uso de esa facultad exclusiva, el Congreso de la Unión expidió las leyes generales en materia de secuestro y en materia de trata de personas, de cuyo contenido se advierte que las entidades federativas mantuvieron facultades para prevenir, investigar y castigar los tipos penales referidos.

Por ello, señaló que el proyecto concluye: 1) que las entidades federativas tienen competencia para legislar en

materia de extinción de dominio, tratándose de delitos de su competencia, así como de aquellos respecto de los cuales tengan una competencia operativa, 2) que las entidades federativas no tienen competencia para legislar respecto del tipo penal ni las sanciones tratándose de los delitos de secuestro y trata de personas, y 3) que, en los demás aspectos, su competencia está determinada por las leyes generales respectivas, las cuales les dan competencia para prevenir, investigar y castigar los delitos allí previstos.

Apuntó que, una vez precisado lo anterior, resta determinar si, en uso de esta facultad de distribución, el Congreso de la Unión reservó a la Federación los procedimientos de extinción de dominio derivados de los delitos de secuestro y trata de personas, para lo cual debe acudir al contenido de las leyes generales respectivas, del cual se advierte que, en el marco de la concurrencia constitucional en materia de secuestro y trata de personas, no existe una atribución competencial exclusiva a la Federación para legislar y conocer de los procedimientos de extinción de dominio originados en dichos delitos.

Finalmente, narró que en el proyecto se observa que los procedimientos para la extinción de dominio —como lo señala el artículo 22 constitucional— son de naturaleza jurisdiccional y autónomos del proceso penal, por lo que su regulación no entra en el ámbito de la competencia federal exclusiva para legislar en materia procedimental penal, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c),

constitucional, por lo que las entidades federativas tienen competencia para regular el procedimiento de extinción de dominio respecto de los delitos de secuestro y trata de personas y, en consecuencia, se propone reconocer la validez de los artículos combatidos.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena estimó que la extinción de dominio no es una figura de derecho común, y que el fundamento que da facultad de forma autónoma a los Estados para legislar en la materia requeriría una habilitación expresa en la ley general reglamentaria del artículo 22 constitucional, la cual en este momento no existe y, por lo tanto, estará por la invalidez de las normas impugnadas por razón de incompetencia, esto es, en contra del proyecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo indicó que, como en el proyecto exclusivamente se toca el tema competencial, se reiteraría en su posición en contra.

El señor Ministro Medina Mora I., se pronunció en contra del proyecto y por la invalidez de los preceptos por falta de competencia, consistente con su posición en asuntos similares.

El señor Ministro Franco González Salas se separó de algunas consideraciones, pero se manifestó de acuerdo con el proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió que, en la parte en la que se citan los precedentes, se ajuste el proyecto con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 30/2015.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto para revisar y adecuar, a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 30/2015, lo referente a la cita de precedentes.

La señora Ministra Piña Hernández reiteró su voto dado en el asunto anterior, en el sentido de que las Legislaturas de los Estados carecen de competencia para legislar en materia de extinción de dominio y, por lo tanto, votaría en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció a favor del proyecto, apartándose de las razones de las páginas treinta y nueve a cuarenta y dos, en cuanto a la confrontación con leyes generales, ya que bastan las disposiciones constitucionales que facultan a los Estados a legislar en esta materia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en reconocer la validez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos apartándose de las razones de las páginas treinta y nueve a cuarenta y dos, Franco González Salas separándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales apartándose de las razones de las páginas treinta y nueve a

cuarenta y dos. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Medina Mora I. votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto particular.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

*“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del considerando cuarto de la sentencia. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 238 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de

once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente de la lista:

### III. 1100/2015

Amparo directo en revisión 1100/2015, derivado del promovido por \*\*\*\*\*, en contra de la sentencia dictada el tres de junio de dos mil catorce por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 6527/12-06-02-3. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a \*\*\*\*\*, en contra de la autoridad y acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad del recurso y a las consideraciones necesarias para resolver el asunto, la cual



se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para la siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cuarenta y dos minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la sesión privada, tras un receso, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes diecinueve de abril del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.